



Posnacionalismo catalán 'versus' nacionalismo español

Provoca sonrojo oír al ministro Catalá mofarse de las 40.000 personas que días atrás recibieron a Artur Mas y a las exconsejeras Ortega y Rigau ante las puertas del Palacio de Justicia tildando de "numerito" su presencia en las calles de Barcelona. No hay mayor muestra de incompetencia de un gobernante ante un problema que debería afrontar con serenidad e inteligencia que recurrir al desprecio a los ciudadanos. Todo ello agravado con el uso de declaraciones, tan recurrentes como simplonas, como las que afirman que "no habrá referéndum porque no puede haberlo", o tan contraproducentes para los intereses gubernamentales como las que ya anuncian el precintado de los colegios electorales, la supresión de la autonomía cuando no la cárcel para algunas autoridades catalanas. Cuesta asumir tanta irresponsabilidad gubernamental atendiendo al hecho de que, de forma inevitable, la cerrazón y la violencia judicial contra la demanda catalana acabará convirtiendo un problema político en una cuestión de vulneración de los derechos humanos. Y, llegados a este escenario, difícilmente podrán sostener otros Estados democráticos el argumento/coartada de que "se trata de un problema interno español". Una actitud del Gobierno Rajoy que se presenta al mismo tiempo bien aderezada por parte de tertulianos de toda condición que desde las televisiones privadas y públicas estatales transmiten con toda desfachatez continuas comparaciones entre la Catalunya actual y los regímenes totalitarios.

No hay duda de que el centro neurálgico del debate político actual se ha situado en el escenario de resultados de la negativa por parte del Gobierno español de negociar las condiciones y la autorización del referéndum. Interés que se acrecienta en la medida en que, inevitablemente, Rajoy tiene que aceptar que el choque democrático se establecerá entre dos legalidades. O sea, asunción de una realidad no deseada: la estabilidad gubernamental del Govern Puigdemont/Junqueras a raíz del pacto presupuestario que permite al independentismo mantener una correlación de fuerzas en el Parlament suficiente para convocar el referéndum. Y todo ello en el marco de la asunción de la voluntad de votar por parte del 80% de los catalanes; es decir, muchos más de los que se declaran independentistas.

En este sentido, es bueno remarcar que, por un lado, a diferencia de lo que defienden aquellos que pretenden asociar referéndum a victoria del sí, en el conjunto de la sociedad catalana, al margen del posicionamiento ideológico, va arraigando su imprescindibilidad. Dicho en otras palabras, crece la convicción que el Derecho a Decidir pertenece tanto a los defensores del sí como a los catalanes que persiguen el mantenimiento de la situación actual. Y, por otro lado, conviene tener presente que el mismo proceso catalán interpela directamente a cada uno de los ciudadanos sobre de qué manera deberá actuar y cómo deberá pronunciarse ante la urna en la que se dirimirán cuestiones tan importantes. Luego, al



Rajoy tiene que asumir que la estabilidad del Govern Puigdemont-Junqueras a raíz del pacto presupuestario permite al independentismo mantener una correlación de fuerzas en el Parlament suficiente para convocar el referéndum

contrario de lo que repiten hasta la saciedad Rajoy y Rivera sobre la fractura entre catalanes, una sociedad que sabe que deberá pronunciarse mediante un sí o un no sobre algo tan trascendental como el nacer o no nacer de un nuevo Estado nunca empequeñece, sino todo lo contrario: madura y, en definitiva, crece.

De ahí que se vayan abriendo camino, en paralelo, nuevos debates sobre las expectativas y objetivos a alcanzar con la proclamación de la República de Catalunya. Efectivamente, nunca como en los últimos meses en barrios, pueblos y ciudades, gracias a la tupida trama de sociedades y entidades que conforman la sociedad civil catalana, se multiplican las reflexiones colectivas sobre el futuro de una Catalunya independiente. Y en todos ellos, hoy por hoy, se consolidan objetivos extremadamente funcionales, muy ligados a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del modelo social y la viabilidad económica del país. En definitiva, cómo hacer posible una distribución de la riqueza más equitativa en el marco de una democracia de excelencia, no limitada a la estricta representatividad, no supeditada a los poderes financieros y cohesionada mediante una cultura pública común basada en nuevos derechos de ciudadanía y nuevos derechos sociales.

En definitiva, una sociedad catalana posnacionalista, en construcción, a caballo de una nueva República. ●

**Portavoz del Grupo Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados.*